

Nuevas recetas para viejos desafíos:
Cómo los gobiernos de
América Latina pueden
impulsar el desarrollo
sostenible a través de la
Economía de Impacto

Un blog de GSG LATAM
2025



AUTORÍA

Qué es GSG LATAM

GSG LATAM es el colectivo regional de capítulos latinoamericanos de GSG Impact, la organización líder en el desarrollo de economías de impacto a nivel global, con 43 Socios Nacionales (*National Partners*) en 48 países.

Conectados por un mismo propósito, respaldados por la red de GSG Impact a nivel global, y enfrentando desafíos comunes, desde la desigualdad social y la crisis climática al deterioro de los sistemas naturales, **GSG LATAM** surge como la voz mancomunada de actores y organizaciones líderes de la región, para movilizar capital, fortalecer ecosistemas locales y construir verdaderas economías de impacto, en la que todas las decisiones de inversión, negocios, gasto público y consumo sean tomadas con el impacto en el centro.

Solo trabajando juntos, y en coordinación con organizaciones aliadas de la región, podremos avanzar hacia economías más justas, sostenibles e inclusivas para alcanzar los objetivos de desarrollo en nuestra América Latina.

Unidos, desde la región, para el mundo y con el mundo.

Somos GSG LATAM.



En este artículo, el colectivo GSG LATAM explora cómo los gobiernos pueden impulsar las economías de impacto a través de la política pública, y comparte ejemplos que ya están transformando el panorama en América Latina. El documento se apoya en el reporte "**Aligning Government Action and Private Capital for Public Good: A Policymaker's Toolkit**", de GSG Impact.



Tres imágenes contrapuestas y simultáneas ocurren en América Latina:

La primera de ellas es su [riqueza en naturaleza y biodiversidad](#).

La región alberga el 40% de las especies del planeta, 25% de los bosques tropicales y 30% del agua dulce del mundo fluye por sus principales cuencas, desde el Río Bravo en México hasta el Río de la Plata al sur del continente.

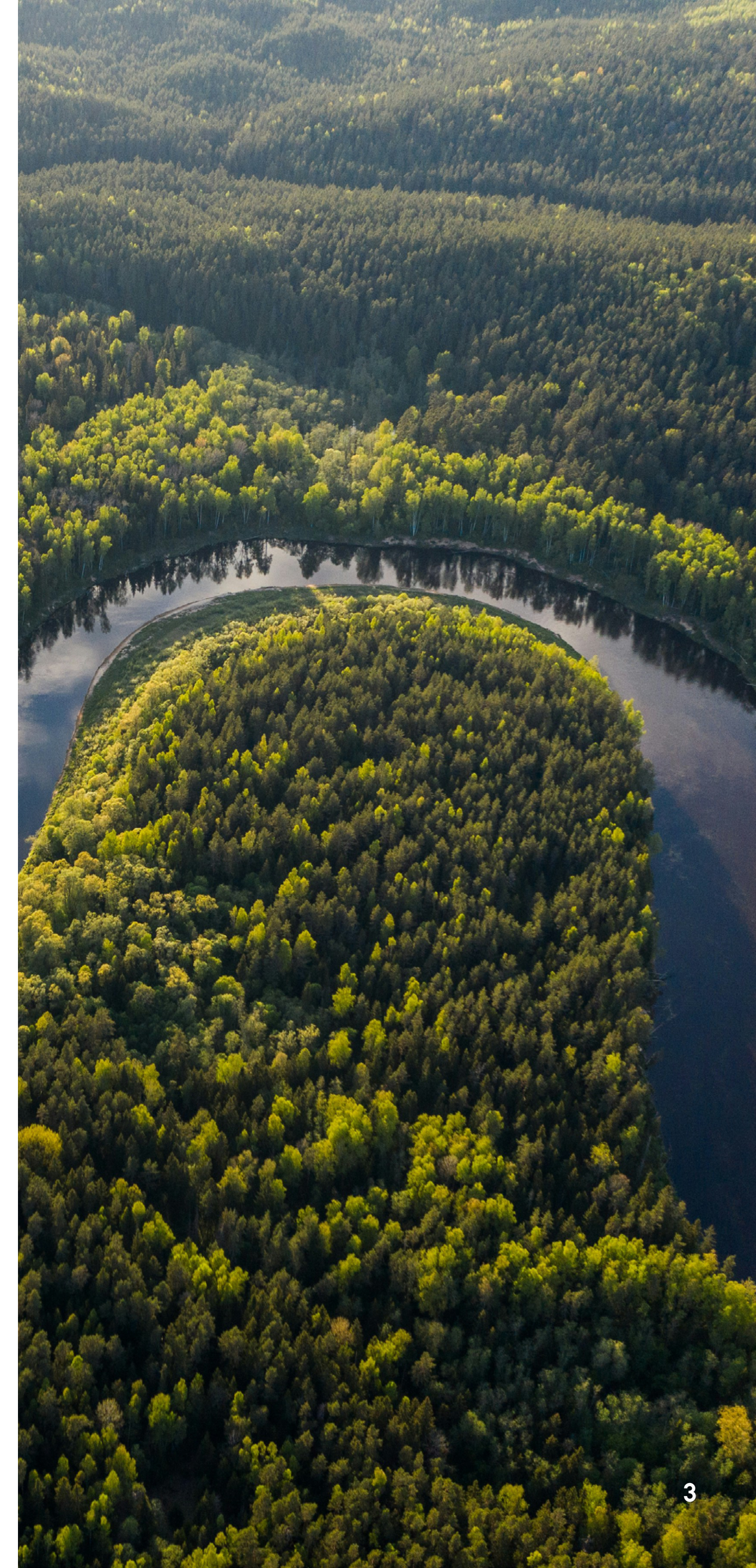
La segunda imagen, igualmente cierta, es que **América Latina es la región socialmente más desigual del mundo, tanto entre países como hacia el interior de ellos**. Según estadísticas del Banco Mundial, el PIB per cápita promedio regional ronda los 10.800 dólares, con una desviación de 6.000 dólares entre países. A esto se suma una desigualdad interna profunda, con un coeficiente de Gini cercano al 50%, y un crecimiento económico proyectado de apenas 2,3% para 2026, de acuerdo al [último pronóstico](#) del FMI.

La tercera imagen es que **el crecimiento del capital de impacto en la región se ha estancado** en el último año. Si bien el último informe [State of the Market](#) del GIIN muestra que entre 2019 y 2025 las inversiones de impacto dirigidas a América Latina se duplicaron, pasando de 16.000 millones a más de 33.000 millones de dólares, con un incremento anual promedio del 13%, este ritmo es más lento que el de otras regiones. Incluso, el crecimiento se estancó entre 2024 y 2025, con volúmenes de inversión prácticamente iguales, lo que sugiere que **el flujo de capital hacia la región ha perdido impulso frente a otros mercados emergentes más dinámicos**.

Sin embargo, el potencial y las oportunidades para desarrollar economías de impacto en América Latina abundan. No solo por el espíritu innovador del ecosistema de impacto en el continente, sino también por el **creciente rol de los gobiernos para construir verdaderas economías de impacto**. Con trayectorias disímiles y con esfuerzos por momentos fragmentados, pero con la innovación al servicio del sector público, muchos gobiernos latinoamericanos han implementado políticas tendientes a **construir ambientes regulatorios propicios para que las economías de impacto florezcan**.

Alineando sector público y sector privado para construir economías de impacto

Financiar el desarrollo latinoamericano es costoso y los recursos son cada vez más escasos. **Los presupuestos públicos ya no alcanzan, la ayuda internacional es limitada y muchos países arrastran altos niveles de deuda**. La región enfrenta un faltante anual de [650 mil millones de dólares](#) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y solo un [tercio](#) de esas metas va camino a cumplirse para 2030. América Latina, además, recibe [80% menos asistencia oficial para el desarrollo que otros continentes como África](#), y en 2020 la [deuda pública promedio llegó al 64% del PIB, el nivel más alto desde 2006](#). Todo esto conduce a la misma conclusión: **financiar el**



desarrollo en la región es cada vez más difícil, y hacerlo con el mismo recetario de siempre será imposible.

Ante este escenario, los gobiernos tienen la posibilidad de incentivar un cambio de paradigma que alinee los incentivos del sector público y privado para trabajar conjuntamente en la creación de economías de impacto. En un contexto donde los recursos escasean y los ciudadanos exigen mejores resultados, **avanzar hacia este modelo implicaría que cada decisión –de consumo, inversión, producción o política pública– esté atravesada por la intención manifiesta de generar un impacto social y ambiental positivo y medible.**

Lograrlo requiere políticas y regulaciones que generen los incentivos para que toda la economía nacional se oriente en esta dirección. Es decir, **movilizar fondos públicos, capital privado y emprendedurismo social al servicio de las personas y el planeta.**

Los gobiernos deben asumir el rol que les toca: dar el ejemplo. En la última década, **muchos han ampliado significativamente sus esfuerzos para promover la inversión sostenible y canalizar capital privado hacia objetivos sociales y ambientales.** Estos avances incluyen la proliferación de taxonomías de finanzas sostenibles, la incorporación de estándares de divulgación de sostenibilidad en la regulación nacional, la creación de estrategias nacionales para el impacto, entre otras medidas que han posicionado a América Latina entre las regiones pioneras en el tema.

Aún así, estas medidas siguen siendo insuficientes si se aplican de

forma aislada. Hoy en día, los activos alineados con el impacto y la sostenibilidad representan apenas el 10% de los más de 305 billones de dólares gestionados profesionalmente en los mercados financieros globales, [de los cuales solo el 8% corresponde a América Latina](#). Los gobiernos pueden hacer mucho para aumentar ese porcentaje, tanto a nivel global, como en América Latina.

Con el objetivo de amplificar los aprendizajes de los gobiernos más innovadores e inspirar nuevas acciones, GSG Impact publicó en 2018 su reporte ["Catalysing an Impact Investment Ecosystem: A Government's Toolkit"](#). Siete años después, la red de GSG Impact ha pasado de 18 a 43 Socios Nacionales, con presencia en 48 países. En [América Latina](#), por su parte, creció de 4 a 7 Socios Nacionales, abarcando actualmente 12 países. En su nuevo informe, ["Towards Impact Economies: Aligning Government Action and Private Capital for Public Good"](#), GSG Impact actualiza las políticas más destacadas implementadas por gobiernos para seguir promoviendo el impacto a nivel local, sobre el convencimiento de que el sector público tiene mucho por hacer para facilitar la transición hacia las economías de impacto.

Innovaciones de Políticas públicas para construir economías de impacto en América Latina

Así como para los inversores la "inversión de impacto" significa invertir para maximizar resultados sociales y ambientales medibles junto con

Solo 8% del capital de impacto global se dirige a América Latina y el Caribe.¹



¹ Source: GIIN, State of the Market 2025: Trends, Performance and Allocations.

un rendimiento financiero ajustado al riesgo, **un enfoque orientado al impacto en la gestión pública plantea colocar al impacto en el centro de cada decisión de inversión, gasto y regulación pública.** Esto puede manifestarse de diversas formas, desde la estructuración de mecanismos de financiamiento basado en resultados, compras públicas sostenibles hasta la creación de incentivos fiscales o para que el capital privado fluya hacia objetivos sociales y ambientales.

Los gobiernos pueden impulsar economías de impacto a través de distintos roles, ya sea como facilitador, regulador o participante del mercado, de acuerdo a una serie de políticas correspondientes a cada uno.

1. Gobierno como *participante del mercado*

Un gobierno que participa en el mercado con el fin último de construir economías de impacto es uno que **piensa, planifica y contrata bienes y servicios en función de resultados, es decir, desterrando los programas y los presupuestos pensados a partir de las actividades y poniendo énfasis en objetivos medibles.** Para lograr este cambio de paradigma, los gobiernos pueden:

- Adoptar modelos basados en resultados para planificar y ejecutar políticas públicas, incorporando objetivos claros y medibles en la formulación de políticas y presupuestos;
- Invertir y adquirir productos y servicios orientados al impacto.

En América Latina abundan los ejemplos de adopción de este enfoque. Por ejemplo, en cuanto a las compras públicas, **Costa Rica** destaca por su enfoque integral y coordinado en la implementación de una [Política Nacional de Consumo y Producción Sostenible](#) en 2018, que exige que todas las entidades públicas y privadas incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en sus prácticas de contratación.

De manera similar, **Chile** introdujo en 2012 la [Política de Compras Públicas Socialmente Responsables](#), con un fuerte enfoque en la igualdad de género y la inclusión social. A través de *ChileCompra*, la agencia nacional de compras públicas, se lanzaron iniciativas como el *Sello Empresa Mujer*, que certifica y prioriza a las empresas lideradas por mujeres en los procesos de contratación pública.

En cuanto a la implementación de mecanismos de pago por resultados, **Colombia** tiene una trayectoria consolidada en este sentido, marcada por el diseño del programa [MAS Pago por Resultados](#) y el lanzamiento de 4 bonos de impacto y el fondo LOGRA. Este programa pionero en Colombia busca promover una mayor adopción de bonos de impacto social, en particular, y financiamiento basado en resultados, en general. En alianza con varios actores, tanto públicos como cooperación internacional y filantropía, incluyendo Fundación Corona (miembro de Impacto Colombia, Socio Nacional de GSG Impact en el país), la iniciativa marcó un punto de inflexión en la manera en que se movilizan los recursos públicos para abordar los desafíos sociales más urgentes de Colombia, a través de la colaboración público-privada y la innovación social.

Colombia se destaca por su trayectoria en la implementación de mecanismos de pago por resultados, con experiencias como los bonos de impacto social y el fondo LOGRA. Actualmente, el gobierno avanza en una estrategia nacional de Pago por Resultados para consolidar y escalar este enfoque.

Además, el Departamento de Prosperidad Social del gobierno de Colombia desempeñó un papel central no solo en el lanzamiento del programa, sino también en la conformación del ecosistema de financiamiento basado en resultados del país, lo cual ha resultado en el comienzo del diseño de una [Estrategia Nacional de Pagos por Resultados](#).

2. Gobierno como regulador del mercado

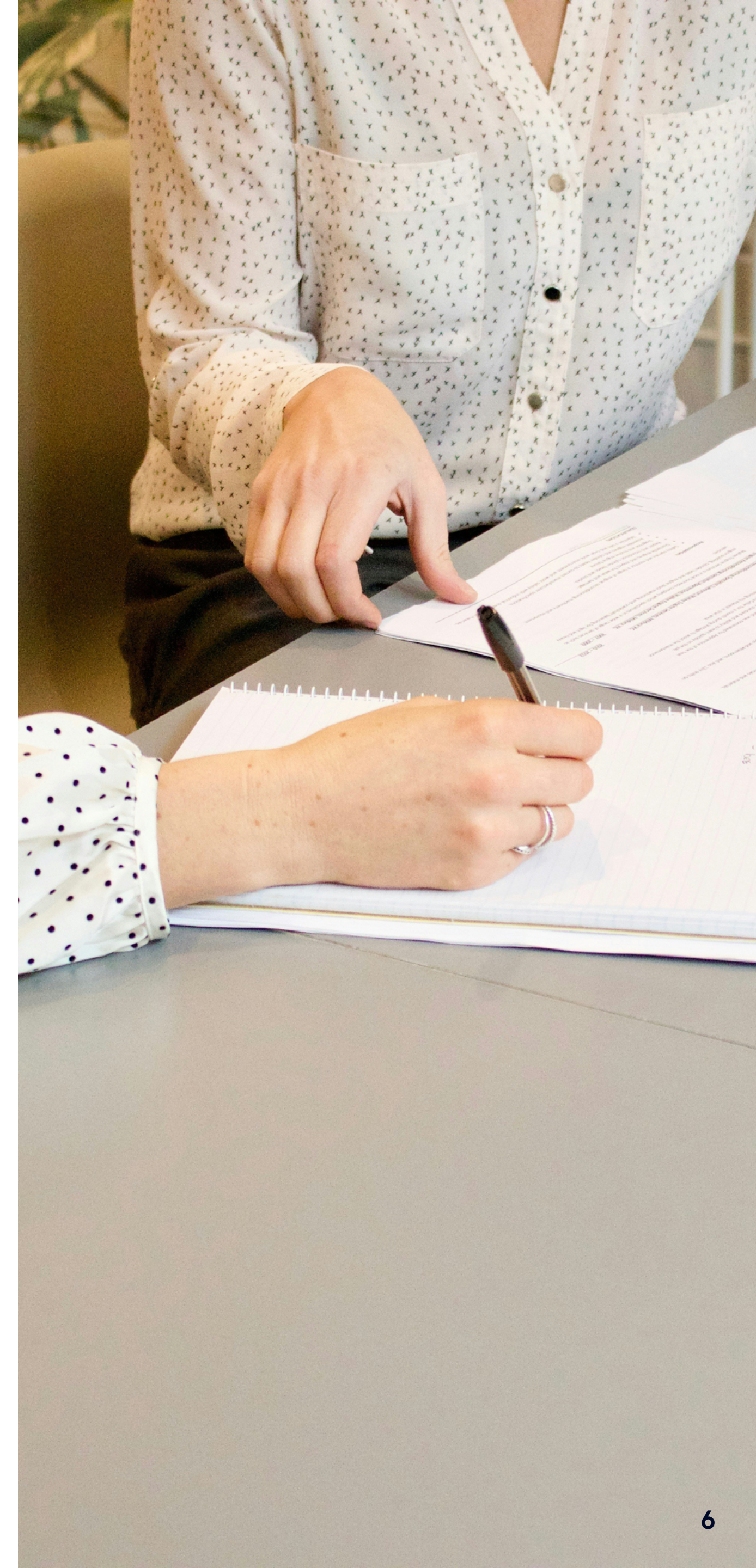
Tal vez una de las funciones más elementales de los gobiernos es la aprobación de leyes y regulaciones. Un gobierno que regula en pos de crear economías de impacto es aquel que **crea incentivos y elimina barreras –mediante incentivos fiscales y legislación– para que el capital privado fluya hacia negocios de impacto**.

Por ejemplo, en los últimos años, la obligación de divulgar información sobre sostenibilidad e impacto se ha consolidado como un eje central de las economías de impacto, promoviendo mayor transparencia. Cada vez más países exigen reportes de sostenibilidad por parte de empresas cotizadas, siguiendo marcos internacionales como los estándares del ISSB de la Fundación IFRS, que constituyen una base global en evolución sobre la cual las empresas pueden divulgar sus riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Hasta la fecha, [36 jurisdicciones se han comprometido a adoptar los estándares del ISSB](#). En conjunto, estos países representan aproximadamente el 60% del PIB mundial, casi el 60% de las emisiones globales de GEI y alrededor del 40% de la capitalización bursátil mundial.

Brasil fue pionero en la adopción de las normas ISSB, cuando en octubre de 2023 el regulador financiero CVM y el Ministerio de Hacienda [anunciaron](#) la integración de dichas normas en su marco regulatorio. Las normas CBPS 01 y CBPS 02, basadas en los Estándares S1 y S2 de la IFRS (International Foundation for Reporting Standards), fueron emitidas para orientar la divulgación corporativa de información sobre sostenibilidad en el país. Mientras que la CBPS 01 establece los requisitos generales para la presentación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, CBPS 02, se centra en las divulgaciones relacionadas con el clima. El liderazgo de Brasil no solo fue ejemplo en la región, sino a nivel global.

Los gobiernos también han avanzado en **legislaciones para distinguir a las empresas con propósito, creando figuras jurídicas específicas**. Este régimen permite la rendición de cuentas, promueve la transparencia mediante reportes de impacto, crea un entorno propicio para los modelos empresariales responsables, atrae inversión de impacto al ofrecer credibilidad sobre el compromiso de las empresas con su misión y fomentan la creación de valor a largo plazo frente a la maximización de beneficios inmediatos.

Este enfoque ganó tracción en América Latina, con **Colombia** a la cabeza al convertirse en el primer país latinoamericano en establecer en 2018 las [Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo \(BIC\)](#). Las denominadas "BIC" deben dar prioridad al abastecimiento sostenible, las prácticas de comercio justo, la participación de los empleados en la toma de decisiones, la diversidad en la gobernanza, las auditorías ambientales y el apoyo a la comunidad. Además, deben reportar su



impacto utilizando estándares independientes (por ejemplo, B Corp, GRI, ISO 26000, etc).

Con más de 2.500 BIC registradas, este tipo de negocios goza de varios incentivos, como reducción de tarifas de propiedad industrial, acceso preferencial a líneas de crédito gubernamentales, ventajas fiscales en la distribución de acciones a empleados y trato preferencial en la contratación pública, evidenciado una relación positiva con otro tipo de política para promover las economías de impacto: los incentivos fiscales.

3. Gobierno como *facilitador del mercado*

Acaso en su rol más dinámico, un estado que actúa como facilitador es aquel que **convoca, educa y fomenta el desarrollo del ecosistema, fortaleciendo la infraestructura y abordando las brechas de información para facilitar el lanzamiento o la expansión de iniciativas centradas en el impacto**. Esto puede implicar reducir cargas administrativas, agilizar la toma de decisiones y garantizar que los responsables cuenten con información clara y completa.

Un ejemplo destacado del papel del sector público como facilitador del mercado, ordenando estratégicamente el enfoque del gobierno y estableciendo prioridades para la estructuración del ecosistema nacional de impacto es la creación de **Estrategias Nacionales de Impacto**. En este sentido, **Brasil** es uno de los pocos países a nivel global que ha creado una estrategia con este fin, al lanzar la

Estrategia Nacional de Economía de Impacto en 2017, posteriormente actualizada en [2023](#). Liderada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, la nueva estrategia está estructurada en torno a cinco pilares estratégicos: ampliar el acceso al capital, aumentar el número de empresas de impacto, fortalecer a los intermediarios, mejorar el entorno regulatorio y profundizar la coordinación con los gobiernos subnacionales.

Lo más importante son sus resultados: la estrategia de 2017 impulsó el ecosistema de impacto de Brasil, ampliando el acceso al capital mediante la selección de tres fondos de impacto respaldados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil por al menos 160 millones de dólares, lanzando una convocatoria de Fondos de Inversión en Cuentas por Cobrar con una contribución potencial de hasta 800 millones de dólares, y asignó 350 millones de dólares adicionales para la respuesta al COVID-19. El número de empresas de impacto creció de 579 en 2017 a 1.271 en 2021; se aceleraron más de 100 start-ups; se apoyaron más de 75 organizaciones intermediarias; y 140 docentes de 70 universidades fueron capacitados en temas relacionados con impacto.

La medida adoptada por Brasil es un bien escaso en el mundo y muchas veces difícil de lograr. Sin embargo, otros países de la región han intentado iniciar un camino virtuoso a partir de estrategias nacionales con contenidos más acotados pero aún así alineados con el impacto, como la promoción de las finanzas sostenibles. En el caso de **Perú**, el Ministerio de Finanzas lanzó su propia [Estrategia de Finanzas Sostenibles](#), mientras que en **Argentina**, se creó en 2023 una [estrategia similar](#).

Brasil es uno de los pocos países del mundo con una estrategia nacional de economía de impacto. ENIMPACTO, lanzada en 2017 y actualizada en 2023 para seguir impulsando el desarrollo de este ecosistema.

Otras medidas que apuntan a dinamizar la economía de impacto y que los gobiernos pueden adoptar son, por ejemplo, la implementación de actividades de formación, o iniciativas de *capacity building*. [Innova Social](#) es un programa de la Corporación de Fomento de la Producción de **Chile** que busca fomentar la innovación social apoyando proyectos que ofrezcan soluciones creativas a desafíos sociales y ambientales complejos, financiando pilotos y prototipos con potencial de impacto escalable y sostenible. Los proyectos son seleccionados en base a su alineamiento con los desafíos prioritarios de cada región, promoviendo la participación local y la colaboración entre actores clave, destacando el enfoque territorial que asegura que las soluciones sean relevantes para las comunidades, al mismo tiempo que fortalece capacidades de innovación y los ecosistemas sociales y productivos locales.

Finalmente, otra de las políticas que han tomado protagonismo en todo el mundo para dinamizar la economía de impacto y canalizar

fondos en esa dirección –y donde América Latina no es excepción– es en el diseño de taxonomías sostenibles. Su función principal es establecer un lenguaje común para clasificar y comparar inversiones responsables, además de contribuir en la prevención del greenwashing.

El Ministerio de Hacienda de **México** lanzó en 2023 su [Taxonomía Sostenible](#), pionera en la región y el mundo por integrar objetivos sociales, como la igualdad de género, la educación, la salud y la inclusión social, junto con metas ambientales, convirtiéndose en un referente regional para países que buscan abordar de forma conjunta los desafíos sociales y ambientales. La taxonomía se propone abordar tres de los desafíos de sostenibilidad más urgentes del país: el cambio climático, la igualdad de género y el acceso a servicios básicos en los municipios. México es uno de los siete países latinoamericanos que [han desarrollado sus propias taxonomías](#) (Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, Chile, República Dominicana, y Panamá), sumándose a los más de 50 a nivel global.

Todos estos son ejemplos de cómo los gobiernos de América Latina ya han avanzado en la promoción de economías de impacto, implementando políticas específicas que, si bien en algunos casos se inspiran en experiencias pioneras de otras regiones, también demuestran la notable capacidad de la región de innovar en nuevos instrumentos y adaptar aquellos ya existentes a las necesidades locales de cada país.

En este contexto, el colectivo GSG LATAM busca actuar como un puente: aprovechar el conocimiento y los recursos de la red global de GSG Impact, presente en 48 países, para conectar a la región con una amplia comunidad de líderes y constructores de economías de impacto, al tiempo que visibiliza y comparte las iniciativas innovadoras que surgen en América Latina y que a su vez son ejemplo para el resto del mundo.